



Registrado bajo el Nro. 78

CAUSA n° 61742

Año 2014



**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

**Tribunal de Casación Penal**

JORGE ANDRÉS ALVAREZ  
Secretario

Sala I del Tribunal de Casación Penal  
Provincia de Buenos Aires

En la ciudad de La Plata a los Doce días del mes de FEBRERO del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires -RC 1805-, doctores Daniel Carral y Benjamín Ramón Sal Llargués, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° **61.742** de este Tribunal "**[REDACTED]** s/ **Recurso de Queja** interpuesto por **Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la Sec. Niñez y Adolescencia de la Pcia. Bs As.**". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el siguiente orden: **SAL LLARGUES - CARRAL**

**A N T E C E D E N T E S**

I. La Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Azul con fecha 4/9/2013 (copia de fs. 1/9) rechazó por inadmisible el recurso de apelación deducido por el Subsec. de Responsabilidad Penal Juvenil de la Sec. Niñez y Adolescencia de la Pcia. Bs As. contra el auto de la Sra. Juez a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de ese mismo departamento, en el cual se dispuso revocar la sanción impuesta por el Jefe del Instituto Lugones (donde el causante se


encuentra alojado), decretó la nulidad del informe disciplinario que imponía una sanción inespecífica y colectiva de diez (10) días y ordenó a la Jefa del Servicio Penitenciario Provincial que arbitrara los medios para incluir en alguna de las unidades de esa zona centro (Sierra Chica, Alvear, Barker, Azul) un área para jóvenes adultos a los fines del cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado ha contraído.

Para así decidir, la Cámara de referencia argumentó que la resolución que se pretendió controvertir se encontraba firme y que a todo evento la decisión cuestionada no causa estado pudiendo reiterarse la petición a la instancia.

Obiter dicta, y en atención a considerar contraproducente su traslado a unidades penitenciarias lejanas a su domicilio, lo que privaría al joven de contención familiar y social, sugiere que el traslado del encartado no se efectúe hasta tanto se incluya en algunas de las Unidades del Servicio Penitenciario de esa zona centro un área para jóvenes adultos de conformidad a lo prescripto por el art. 15 de la ley 12.256 -tal como se manifestó en la resolución impugnada-.

II.- Contra esa sentencia recurrió en casación el Subsecretario citado, nuevamente con el patrocinio del Secretario Letrado del Fiscal de Estado de la Provincia

51

  
JORGE ANDRES ALVAREZ  
Secretario  
Sala I del Tribunal de Casación Penal  
Provincia de Buenos Aires

de Buenos Aires, Dr. Martín Jorge Lasarte (fs. 13/24),  
remedio que fue declarado inadmisibile por el "a quo" con  
fundamento en su extralimitación del art. 450 CPP en  
función de la materia controvertida.

El recurrente alega interés y legitimación  
suficientes por el bloqueo que la Cámara a quo interpuso  
imposibilitando al Poder Ejecutivo "...acceder a la doble  
instancia..." (y en consecuencia su derecho de defensa y el  
debido proceso) toda vez que se encontró extemporánea la  
apelación, insusceptible de apelación la denegatoria del  
traslado y se sugirió su postergación hasta tanto se  
ejecute el Programa de Jóvenes Adultos en un lugar  
cercano a la residencia del joven de marras. Señala  
ausencia de tratamiento de cuestiones esenciales  
planteadas (art. 168 de la Const. Prov.; arts. 106 CPP).

Denuncia excesivo rigorismo formal (conjuntamente  
con errónea interpretación de las constancias de la  
causa) y yerro al supeditar "la plena aplicación de una  
ley vigente y sus disposiciones al cumplimiento por parte  
de la administración de obligaciones que el propio  
legislador no ha previsto", extralimitando sus funciones  
jurisdiccionales.

Arguye claro perjuicio para esa Secretaría en  
cuanto permite el alojamiento de mayores de 18 años en

dispositivos destinados a menores de edad e impide el pleno cumplimiento de los mandatos legales que rigen su tarea (leyes n° 13.737, 13.634 y 12.256) alterándose "el principio funcional de división de poderes" (art. 1 CN).

En aval de su legitimación recursiva formal invoca -junto al interés concreto que lo guía y las disposiciones de los arts. 421 y ss. del CPP- lo actuado en causa "Verbitsky Horacio s/ Hábeas Corpus, recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales", lo dictaminado por la Procuración General ante la Suprema Corte Provincial in re P. 103.248, y lo resuelto por la Sala III de este Tribunal en causa n° 9820.

Reclama asimilación de lo criticado a sentencia definitiva en los términos del art. 450 CPP por la concurrencia de gravamen irreparable, o a todo evento excepcional apertura de esta jurisdicción por encontrarse involucrada gravedad institucional, o en su defecto por necesidad de agotamiento de la instancia (art. 14 de la ley 48).

A mayor abundamiento, relata el accidentado trámite de las actuaciones respecto a los cuatro jóvenes destinatarios de la sanción -luego anulada- y del pedido de traslado -rechazado-, y las distintas situaciones procesales en las que se encontraría cada uno de ellos al

52

JORGE ANDRÉS ALVAREZ  
Secretario  
Sala I del Tribunal de Casación Penal  
Provincia de Buenos Aires

momento de la interposición del recurso de apelación por el funcionario ocurrente. También resalta que el requisito de existencia del Programa de Jóvenes Adultos en el Complejo Centro, todavía sin implementación, no se erigió en obstáculo para las anteriores intervenciones de los órganos jurisdiccionales departamentales al momento de decidir los traslados de otros jóvenes adultos en circunstancias de idéntica naturaleza.

Refuta que el realojamiento pretendido vulnere específicamente el derecho de acercamiento familiar y social privando a los destinatarios de esa contención.

Agrega que pudo válidamente exigirse la disposición de los medios para garantizar ese acercamiento (provisión de pasajes oficiales, entre otros), pero no indicar al Poder Ejecutivo a qué medios debía acudir para cumplir con sus obligaciones (art. 15 de la ley 12.256), tarea incluida en el diagrama de políticas públicas relativas a la contención y tratamiento de jóvenes adultos que no tiene previsto la existencia del Programa de referencia en el Complejo Penitenciario Centro.

Finaliza peticionando se haga lugar al recurso revocando la resolución atacada, y a todo evento formula reserva del caso federal.

III.- El recurso de casación fue denegado por la Cámara *a quo* (fs. 27/28), lo que determinó la presentación de queja ante este Tribunal (fs. 29/36 vta.). En ésta, esencialmente se reproducen los agravios contenidos en la pieza referida en el ítem anterior.

IV.- Radicadas las actuaciones en esta Sala I (fs. 38) y efectuadas las notificaciones de ley, se manifestó el Sr. Fiscal ante el Tribunal, Dr. Carlos Arturo Altuve (fs. 39/46) pronunciándose sobre la apertura de la jurisdicción de esta sede en la impugnación por la "manifiesta importancia institucional de la cuestión" (fs. 39vta. supra) en orden a la estricta observancia del superior interés del niño que orienta las disposiciones del régimen legal de la ley 13634 y 26061 (CIDN ats. 3.1 y 40.1). Sostiene que lo resuelto por el órgano *a quo* resulta ajustado a derecho y desarrolla extensamente los fundamentos legales y convencionales en los que basa su postura.

Por su parte también se expidió el Sr. Defensor Adjunto ante el Tribunal, Dr. Hernández (fs. 49/vta.), reclamando la declaración de inadmisibilidad de la queja, o en subsidio el rechazo por improcedente del recurso de casación adhiriendo a las consideraciones vertidas por la contraparte.

53

Jorge A. Alvarez

JORGE ANDRES ALVAREZ  
Secretario  
Sala I del Tribunal de Casación Penal  
Provincia de Buenos Aires

IV.- Hallándose la causa en estado de resolver, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y decidir las siguientes:

### C U E S T I O N E S

1ra.) ¿Es admisible y en su caso procedente el recurso de queja interpuesto?

2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

**A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:**

I.- Tal como invariablemente lo viene resolviendo esta Sala (en consonancia con lo sostenido por la CSJN in re "Arce", Fallos 320:2145, entre otros) deviene al menos desafortunada la invocación a la garantía del debido proceso o al derecho de defensa en juicio invocado por el recurrente a favor del Estado. Éste sólo tiene la facultad de ejercitar atribuciones legales regladas taxativamente y las garantías amparan -por definición- exclusivamente a las personas.

II.- A todo evento, y si como se desprende del escrito de presentación, la materia en disputa involucra alguna especie de "conflicto de poderes", resulta intrínsecamente contradictoria la pretensión de

sometimiento del caso a la jurisdicción de este Tribunal. Al menos, el ocurrente ha incurrido en yerro de la vía y el órgano encargado de abordar semejante entuerto.

III.- Dejando de lado cuestiones formales, tal como lo propone el Sr. Fiscal de Casación, y teleológicamente orientados a resolver la controversia no cabe más que receptar íntegramente el dictamen colacionado por éste.

En las propias palabras del Dr. Altuve: "... el reclamo giraría entonces en torno a dos cuestiones: a) la inconveniencia de que el mismo permanezca una vez cumplidos los 18 años de edad privado de su libertad en un establecimiento dependiente de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, en contacto con jóvenes de edad menor; b) el perjuicio de incluir a [REDACTED] en el Programa de Jóvenes Adultos, realojándolo, en consecuencia, en una Unidad Penitenciaria lejana a su domicilio, circunstancia que lo privaría de contención familiar y social..." (fs. 40).

Entiendo, junto con él, que "... la respuesta debe ser integral y debe encontrarse teniendo como directriz la garantía del interés superior del niño, respetándose los patrones legales mínimos nacionales e internacionales, con el objeto de preservar la integridad y garantizar



21  
JORGE ANDRÉS ALVAREZ  
Secretario  
Sala I del Tribunal de Casación Penal  
Provincia de Buenos Aires

*condiciones de detención que contemplen su especial situación de vulnerabilidad." (ídem).*

Luego de una medulosa reseña de los parámetros nacionales e internacionales aplicables al caso, el dictaminante concluye que: de una interpretación armónica de los criterios internacionales de de derechos humanos que deben ser observados, aún cumpliendo los dieciocho años de edad siguen manteniendo la categoría de menores para la justicia penal juvenil, aquellos jóvenes que habiendo cometido un delito antes de los 18 años de edad, pueden ser castigados, o han sido castigados por un delito en forma diferente a un adulto.

Acompaño al Sr. Fiscal en este aserto y también en la derivación razonada de esta premisa (fs. 43): "...siendo la Autoridad de Aplicación de la ley 13.634 la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires (conf. Art. 69 Ley 13.634, inc. 2 y 9 del Anexo 4 del Decreto 11/11 del Poder Ejecutivo), circunstancia que por otra parte es expresamente reconocida por el impugnante en su reclamo, es ella la autoridad responsable de garantizar la ejecución de las sanciones impuestas a los jóvenes en procesos iniciados bajo el régimen de la Ley 13.634 es decir, por delitos cometidos cuando los mismos contaban al momento del hecho

con menos de 18 años de edad -tal el caso de [REDACTED]  
[REDACTED] - se cumplan observando minuciosamente las  
disposiciones aplicables en materia penal juvenil..." .

Si la ejecución penal es competencia del Fuero especializado, ello sólo puede tener sentido en la medida que la normativa aplicable a niñas, niños y adolescentes contemple también a quienes cumplen sanciones impuestas en el marco de la ley 13.634, aún cuando posteriormente alcancen la mayoría de edad.

En esa inteligencia corresponde resaltar especialmente el art. 3 de la ley 13.298 en cuanto dispone que la "...política respecto de todos los niños tendrá como objetivo principal su contención en el núcleo familiar, a través de planes, y programas de prevención, asistencia y reinserción social..." entendiendo como superior interés del niño "...la máxima satisfacción integral simultánea de sus derechos...".

Aunado a lo anterior, no resulta nimio atender al art. 197 de la ley 24.660 en tanto "... los jóvenes adultos de dieciocho a veintiún años deberán ser alojados en instituciones especiales o en secciones separadas o independientes de los establecimientos para adultos. En su tratamiento se pondrá particular empeño en la enseñanza obligatoria, en la capacitación profesional y en el

72

Jorge A. Alvarez

JORGE ANDRES ALVAREZ  
Secretario  
Sala I del Tribunal de Casación Penal  
Provincia de Buenos Aires

**mantenimiento de los vínculos familiares..."** (el resatado pertenece al escrito original, fs. 43 vta); y lo normado en consonancia por la ley 12.256 que en su art. 15 establece: "... Los jóvenes adultos (de 18 a 21 años) serán alojados en establecimientos o secciones especiales con el objeto de facilitar el desarrollo de aquellos programas asistenciales y/o de tratamiento ... teniendo especial énfasis en los aspectos formativo educativos ... teniendo en cuenta los requerimientos propios de la edad...".


Como consecuencia de todo lo expuesto, puede y debe acompañarse desde esta judicatura, sin hesitación alguna, la categórica afirmación de fs. 43 vta., toda vez que :  
*"... la circunstancia de no haberse creado en las Unidades Penitenciarias próximas al domicilio del joven ... espacios especialmente destinados a su alojamiento, tal y como así lo dispone la normativa vigente en razón de que el Poder Ejecutivo, al decir del recurrente, '...ha destinado a otros fines...'; no puede en modo alguno redundar en un perjuicio para el joven implicado, pues como surge indudable de la legislación citada, el vínculo del niño con su familia no sólo es un derecho del que goza sino que es un deber del Estado la garantía de su observancia."*

Que el alojamiento de un joven sea en la esfera del Servicio Penitenciario Bonaerense, tal como lo propicia el Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, no exime a la Secretaría de Niñez de su obligación de garantizar que el régimen de cumplimiento de la sanción responda a la normativa específica del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En esa intelección y como reconocimiento tácito de lo argumentado cabe traer a colación la experiencia del Centro Cerrado de Virrey del Pino dependiente de esa Secretaría (que recibe exclusivamente a jóvenes de más de 18 años en cumplimientos de sentencias dictadas bajo la ley 13.634).

Las alegadas gestiones exitosas de ese organismo, en las oportunidades en que a idénticos pedidos al presente, los órganos jurisdiccionales resolvieron en consonancia con su pretensión no deja de ser una falacia no formal tipificada ya por Irving Copy ("Introducción a la Lógica", Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1962, cap. III), nada menos que la falacia realista. Se erige en una argumentación psicológicamente convincente -persuasiva en forma eventual- pero formalmente inválida que confunde los planos de la discusión: "a lo que debe ser se le responde con lo que

36

  
JORGE ANDRÉS ALVAREZ  
Secretario  
Gala I del Tribunal de Casación Penal  
Provincia de Buenos Aires

es", y en esa medida es infértil para la solución del caso.

Por otra parte, la simple mención a la contingente disposición de recursos materiales para neutralizar la vulneración del acercamiento familiar, resulta -como lo sostiene el dictamen- cuanto menos inconsistente y carente de virtualidad si no se encuentra acompañada de un plan estratégico articulado con el Servicio Local que asegure eficazmente que no van a perjudicarse los vínculos indispensables en aras de la reinserción del joven.


Para finalizar, y en base a los compromisos internacionales asumidos al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 37, 39, 40 y 3.1), en el principio de Buena Fe del art. 31.1 de la Convención de Viena ("Corte Interamericana de Derechos Humanos "Loayza Tamayo vs. Perú" de 17/09/1997); el art. 1.1 de la CADH (Fallos 318:514); la Observación General n° 10/2007 sobre los derechos del niño en la justicia de menores del Comité de los derechos del Niño de la Naciones Unidas; Observación General n° 13 de las Naciones Unidas (citada por la CSJN en M 1022 7/12/2005); las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (art. 2), entre otras, lo reiteradamente señalado por la CSJN en relación de la obligación de

prestar un servicio público, su cumplimiento en condiciones adecuadas y la responsabilidad por los perjuicios ocasionados por su cumplimiento o ejecución irregular (Fallos 312:1656, 315:1892, entre muchos otros); y lo actuado en consecuencia por el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales a tenor de las leyes 26.061 de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes (en especial art. 3 y su decreto reglamentario 415/2006, art. 19); y las leyes 13.298 y 13.634; nada impide que la Secretaría de Niñez y Adolescencia asuma sus responsabilidades respecto de los jóvenes en trato máxime cuando la inobservancia de esos compromisos acarrea la eventual responsabilidad internacional del Estado (Corte Interamericana de Derechos Humanos *in re* "Mendoza y ot. Vs. Argentina", de 14/5/2013).

En base a todo lo expuesto, cabe reconocer que asiste razón a la Sra. Juez de grado cuya resolución se encuentra ajustada a derecho y merece permanecer ícólume.

Voto por la NEGATIVA.

**A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Carral , dijo:**

  
JORGE ANDRÉS ALVAREZ  
Secretario  
Sala I del Tribunal de Casación Penal  
Provincia de Buenos Aires

Adhiero al voto del doctor Sal Llargués expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Voto por la NEGATIVA.

**A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:**

En consideración al acuerdo alcanzado en la cuestión anterior corresponde rechazar, sin costas en esta sede, la impugnación deducida por el Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Carlos Martín Corrales, con el patrocinio letrado del secretario letrado de la Fiscalía de Estado, Dr. Martín Jorge Lasarte, por los fundamentos expuestos (arts. 421, 433, 450, 530, 532 y ccs. CPP; arts. 37, 39, 40 y 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; art. 31.1 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados; art. 1.1 de la CADH; art. 14 del PIDCP; Observación General n° 10/2007 del Comité de los derechos del Niño de la Naciones Unidas; Observación General n° 13 de las Naciones Unidas; art. 2 de las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores; arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; art. 15 de la

Const. Prov.; art. 3 de la ley 26.061 de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes y en especial su decreto reglamentario 415/2006, art. 19; art. 197 de la ley 24660; art. 15 de la ley 12256; y las leyes 13.298 y 13.634).

Es mi voto.

**A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Carral, dijo:**

Adhiero al voto del doctor Sal Llargués expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.

**Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:**

#### **S E N T E N C I A**

**Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede el Tribunal resuelve:**

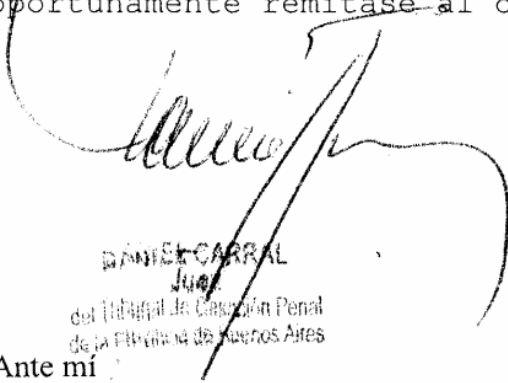
**RECHAZAR**, sin costas en esta sede, la impugnación deducida por el Subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Carlos Martín Corrales, con el patrocinio letrado del secretario letrado de la

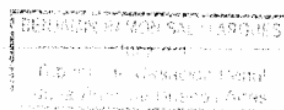


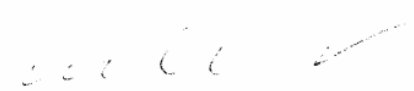
Fiscalía de Estado, Dr. Martín Jorge Lasarte, por los fundamentos expuestos.

Rigen los artículos 421, 433, 450, 530, 532 y ccs. CPP; arts. 37, 39, 40 y 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; art. 31.1 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados; art. 1.1 de la CADH; art. 14 del PIDCP; Observación General n° 10/2007 del Comité de los derechos del Niño de la Naciones Unidas; Observación General n° 13 de las Naciones Unidas; art. 2 de las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores; arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; art. 15 de la Const. Prov.; art. 3 de la ley 26.061 de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes y en especial su decreto reglamentario 415/2006, art. 19; art. 197 de la ley 24660; art. 15 de la ley 12256; y las leyes 13.298 y 13.634.

Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente remítase al órgano de origen.

  
DANIEL CARRAL  
Juef.  
del Tribunal de Casación Penal  
de la Provincia de Buenos Aires  
Ante mí



  
JORGE ANDRES ALVAREZ  
Secretario  
Sala I del Tribunal de Casación Penal  
Provincia de Buenos Aires